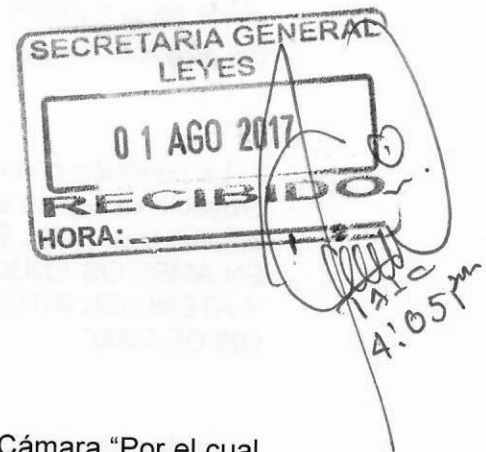




Bogotá D.C., 24 de julio de 2017

Doctor
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente
Cámara de Representantes
Bogotá



Respetado Señor Presidente:

En consideración a la discusión del Proyecto de Ley No. 041 de 2016 Cámara "Por el cual se tutela el derecho al libre desarrollo sexual de las niñas y niños menores de 14 años", por intermedio suyo presento la siguiente:

CONSTANCIA

1. Que el Consejo Superior de Política Criminal en carta de comentarios enviados a los Proyectos de Ley Estatutaria No. 112 de 2016 Senado y a los Proyectos de Ley No. 087 DE 2016 Senado y 041 de 2016 Cámara, concluye lo siguiente:

"El Consejo Superior de Política Criminal considera que los proyectos de ley sometidos a estudio, por los motivos antes señalados, presentan visos de inconstitucionalidad que los hacen inviables.

Asimismo, aunque las iniciativas legislativas marcan un grado de evolución en la búsqueda de alternativas para la protección de la libertad, integridad y formación sexual de las niñas y niños del país, superando visiones anacrónicas de cara a la construcción de un derecho penal conforme con principios democráticos y constitucionales, como las que propugnan por el establecimiento de sanciones de pena de muerte o cadena perpetua para los agresores, en todo caso tampoco establecen alternativas viables e integrales para el abordaje asertivo del fenómeno y su aprobación implicaría el reforzamiento de acciones de carácter inmedatista, con lesión de derechos fundamentales, y que como resultado pueden traer consigo ejercicios desproporcionados del poder punitivo con muy poca eficacia social.

Por los anteriores criterios de inconveniencia político-criminal de los proyectos, sumados a la necesidad de fortalecer la exigencia de construcción de proyectos de ley o acto legislativo en materia penal que posean una amplia y consistente sustentación, principalmente fundada en evidencia empírica, relativa a su constitucionalidad, conveniencia, pertinencia y necesidad incluidas en sus exposiciones de motivos, se emite el presente concepto desfavorable. Sin embargo, se destaca que de realizarse las modificaciones a las que se



alude en el numeral cinco (5) de este concepto sobre “Las necesidades de mejoramiento del proyecto de ley”, el proyecto de ley estatutaria puede tener viabilidad.”

2. La comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en el periodo pasado un proyecto de ley en el mismo sentido a saber Proyecto de Ley 165 de 2016 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA INHABILIDAD TEMPORAL PARA EJERCER CARGOS EN ÁMBITOS EDUCACIONALES O QUE TENGAN COMO FUNCIÓN LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE Y SE MODIFICA LA LEY 599 DE 2000”.

3. La Constitución política de Colombia de 1991, vigente hasta el día de hoy, consagra en su artículo 15 lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (...)”. Por lo anterior, resulta pertinente exponer algunas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, en relación con el artículo 15 constitucional, en las que se ha venido consolidando jurisprudencia sobre el Derecho al Olvido, el buen nombre y el Habeas Data, en cuanto a los antecedentes penales se refiere:

La sentencia T-414/92, estableció que “Se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer “erga omnes”, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. **Esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor esencial** (...)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente concluye la Corte en esta sentencia que **“es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perpetuidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido”**. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Con posterioridad, las sentencias T-307 de 1999 y T-729 de 2002, de la misma Corte, definió que frente al Habeas Data, este derecho incluye, “la facultad de toda persona de solicitar y obtener, en un tiempo razonable, la corrección, complementación, inserción, limitación, actualización o cancelación de un dato que le concierne” y que además, **“no puede recolectarse información sobre datos “sensibles” como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación política o su credo religioso, cuando**



ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de discriminación o marginación. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

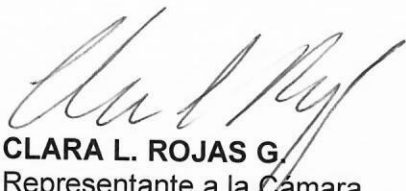
Para complementar lo anterior, en la Sentencia T-310 de 2003, expone la Corte el reconocimiento al principio de caducidad o de temporalidad de la información negativa, lo que implica que la información personal desfavorable al titular de la misma debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y de oportunidad. Igualmente, se ha considerado constitucionalmente inadmisibles la conservación indefinida de datos personales que **revelen información negativa una vez hayan desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración,** (Negrilla y subrayado fuera de texto), tal y como se pretende hacer con el proyecto de ley propuesto.

Finalmente, la Sentencia SU-458 de 2012, recopiló otras decisiones de la Corte Constitucional, y dijo que los antecedentes penales son datos personales propios y exclusivos de la persona.

Retomando los elementos de los precedentes indicados, se puede concluir que la Corte considera que la publicidad indiscriminada de la información sobre antecedentes penales no cumple una finalidad legal o constitucional, no es útil ni necesaria. Por el contrario, considera la Corte que dicha información facilita el ejercicio incontrolado del poder informático, constituye una barrera de facto para el acceso o la conservación del empleo y facilita prácticas de exclusión social y discriminación prohibidas por la Constitución.

En nuestra opinión, si bien entendemos la bondad del proyecto consideramos que el mismo es inconstitucional por los argumentos previamente expuestos.

Atentamente,



CLARA L. ROJAS G.
Representante a la Cámara
Partido Liberal

